

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2012

COMPLEMENTO I AL ORDEN DEL DIA N° 148

Impreso el día 23 de abril de 2012

Disidencia parcial respecto del Artículo 15 del dictamen de mayoría emitido por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles en el Expte. N° 27/12 Mensaje del Poder Ejecutivo N° 529/12 y Proyecto de Ley Declarando de Utilidad Publica y sujeto a Expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de Las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes a REPSOL YPF S.A, sus controlantes o controladas, en forma directa e indirecta.

De acuerdo a las disposiciones del Reglamento de H. Senado de la Nación, esta disidencia pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2012

Redacción propuesta:

ARTÍCULO 15.- Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, en los términos del Capítulo II, Sección VI, de la ley 19.550 y normas concordantes. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24.624. Estará sometida asimismo a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156.

Fundamentos de la Disidencia

Señor presidente:

El artículo 15, del Capítulo III denominado “De la Continuidad Jurídica y la Gestión de YPF S.A” del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso de la Nación dispone que: *“YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley de Sociedades N° 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación.”*

A mi juicio el encuadre jurídico elegido por el Poder Ejecutivo para YPF no es acertado por distintas razones. En primer lugar consideramos que, luego de producida la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF S.A., conforme lo dispuesto en el artículo 8º del proyecto de ley, el Estado nacional y las provincias integrantes de la OFEPHI serán los accionistas mayoritarios de YPF, convirtiendo a la referida empresa en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y por lo tanto comprendida en los términos del Capítulo II, Sección VI y no V, de la ley 19.550. Encuadrar una sociedad con mayoría accionaria estatal bajo el régimen de una sociedad anónima privada es, a nuestro entender, un encuadre inconveniente.

En segundo lugar, no coincidimos con la redacción del artículo 15 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo y del dictamen en consideración debido a que expresamente se sustrae a YPF de las normas de control propias de la administración pública, al disponer que no le son *“aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación.”*

Se pretende evitar así que YPF esté sujeta a las instituciones y a los procedimientos de control que establece la ley 24.156 de “Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional” y por lo tanto se la sitúa por fuera de los controles que realizan la SIGEN y la AGN. Al respecto resulta pertinente transcribir los artículos 7º y 8º de dicha ley, que sin duda le son aplicables a YPF, si no se tratara de imponerle una figura extraña a su naturaleza jurídica.

“Artículo 7º.- La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente.

Artículo 8º.- Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto estará integrado por: a) Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendidos en estos últimos a las instituciones de seguridad social; b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las Sociedades del Estado, *las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria*, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación estatal mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se le hayan otorgado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.”

Por lo tanto, si las normas de contralor público previstas en la ley 24.156 le son aplicables incluso a empresas privadas cuando éstas

reciban subsidios o aportes del Estado, resulta inconveniente que se quiera excluir de dichos controles a YPF cuando su patrimonio accionario mayoritario estará, por efecto de la expropiación, en manos del Estado nacional y de los estados provinciales y además se faculta al el Poder Ejecutivo para ejercer todos los derechos que las acciones expropiadas le confieren. (Conf. Art. 13 y subsigtes. del proyecto).

No compartimos el argumento de quienes sostienen que someterse a los organismos y procedimientos de control público obstaculizan o afectan negativamente la gestión y la eficiencia de la empresa, en este caso YPF. En el caso de la AGN recordemos que el alcance de su intervención es siempre a posteriori de los actos y que siendo así difícilmente pueda obstaculizar o interferir en la gestión y la eficiencia empresaria. Además, las consecuencias de aprobar el artículo 15, tal como se propone y de encuadrar a YPF como una sociedad anónima privada, se extienden a otras cuestiones. Como por ejemplo, la posibilidad de que YPF contrate en forma directa por fuera de las reglas y procedimientos vigentes para el sector público, sin llamar a concurso de precios o eximiéndola de la obligación de convocar a licitaciones nacionales o internacionales para la adjudicación de obras o servicios.

Finalmente me pregunto si el matiz privatista que se desprende del encuadre jurídico dado a YPF no hará que, quienes asuman los cargos de directores, suplentes o titulares, se sientan menos obligados a cumplir con las responsabilidades que las leyes imponen a los funcionarios públicos, creen que están por fuera del régimen de incompatibilidades, se consideren ajenos a los conflictos de intereses entre el interés privado y el bien público y si asumirán con honorabilidad las obligaciones que emanan del manejo de recursos públicos, sometiéndose a las reglas de transparencia y ética propias de la función pública.

No creo necesario dar respuesta a estas preguntas. Propongo en cambio la modificación del referido artículo 15 del dictamen, por otro que diga, tal como se aprobó para la ley 25.943 de creación de ENARSA, que regirá para YPF *lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24.624 y estará sometida asimismo a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156.*

Para un rápido entendimiento de las referencias normativas citadas en el texto que pongo a consideración del Senado, transcribo las mismas a continuación:

Ley 24.624 Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996.

ARTICULO 21. — Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley N° 23.982, en razón de la fecha de la causa o título de la obligación o por cualquier otra circunstancia, que se dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro ente u organización empresaria o

societaria donde el Estado Nacional o sus entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán ejecutarse contra el Tesoro Nacional, ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.

Ley 24.156 Ley de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.

Samuel M. Cabanchik.

* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO